

LOS CONTEXTOS DE ORIGEN Y DESTINO EN LA CONFIGURACIÓN
DEL ESCENARIO TRANSNACIONAL COLOMBIA-ESPAÑA

ADRIANA GONZÁLEZ GIL Y MARCELA TAPIA LADINO

Conocer y comprender el escenario en que ocurre la migración de colombianos a España nos invita a revisar los factores que actúan tanto en el contexto de origen como en el destino migratorio. En este apartado presentamos las características del contexto de origen y recepción de la migración colombiana a España en general; y de la migración de las familias de (AMCO) y (AMVA) a la Comunidad de Madrid en particular.

Nuestro desafío ha sido pensar en un contexto pertinente, que permita situar las distintas dimensiones del mismo en la perspectiva de contribuir al análisis del proceso migratorio colombiano y, en nuestro caso, de las familias migrantes colombianas en la ciudad de Madrid. Un contexto que responda al enfoque transnacional aquí definido y que posibilite entender el fenómeno de la migración como un conjunto dinámico que vincula las condiciones de la sociedad de origen con las particularidades de la sociedad de destino y que subraya en la migración la articulación de flujos humanos considerados individual y socialmente, en cuyo centro ubicamos la configuración y consolidación de las familias transnacionales.

De este modo, el contexto que aquí construimos no es más que una aproximación a aquellas dimensiones consideradas relevantes, tanto de la sociedad de origen como de la de destino, y en estrecha relación con la dinámica migratoria, específicamente con el impacto de las remesas económicas en las familias transnacionales. Esto no significa que atribuyamos al contexto un carácter determinante de la migración colombiana hacia España; lo que reiteramos es que un análisis de la evolución

y tendencias de la migración —que nos permita identificar y caracterizar la especificidad del caso colombiano—, en relación particular con las familias, es un asunto que demanda una consideración del contexto entendido como del entramado de relaciones y dimensiones estructurales y coyunturales que están en la base del proceso migratorio. De las particularidades de ambos contextos y su articulación como escenario transnacional nos ocuparemos en los apartados que siguen.

Si bien es posible identificar móviles individuales y condicionantes sociales que explican el crecimiento del flujo migratorio colombiano hacia España con una motivación especialmente económica, es preciso, de un lado, desvelar algunos de los fenómenos que consideramos relevantes para explicar la decisión migratoria, inscrita en un conjunto de factores que desbordan los límites de las situaciones individuales, haciendo visible su connotación social. Y de otro lado, identificar las condiciones del contexto de destino, particularmente, la demanda de mano de obra que se observa en España a partir de 1995, el crecimiento de su economía y la mayor incorporación de la mujer española al mercado laboral, todos ellos factores favorables al incremento de la migración.

La migración al país ibérico por parte de colombianos es un proceso reciente, tal como lo revelan los datos de estadísticas y estudios de investigación realizados tanto en Colombia como en España. Específicamente, el investigador Luis Jorge Garay señala que "por ser la migración del colectivo colombiano a España un fenómeno reciente, creciente y sujeto a una constante transformación, precisa una atención y análisis permanentes" (Garay, 2008: 76). Por su parte, la investigación de Díez (2006) identifica dos periodos en la inmigración de colombianos en España: el primero, entre 1995 y 1999, cuando el tamaño de este colectivo crece gradualmente; el segundo desde 2000, cuando el tamaño de la población colombiana en España crece rápidamente duplicando su tamaño de año en año. Las cifras oficiales reflejan también este crecimiento. Los resultados del Censo General de Colombia de 2005 muestran que España ocupa el segundo lugar (23,3 por ciento) entre los países de destino de las personas colombianas que residen en el exterior, después de Estados Unidos (35,4 por ciento). De acuerdo con los datos del INE (2007), el colectivo colombiano ocupa el cuarto lugar más numeroso entre los extranjeros no comunitarios residentes en España, por detrás de los nacionales de Marruecos, Ecuador y Rumanía, con un total de 265.141 personas (6,40 por ciento).

Al mismo tiempo que señalamos lo reciente del fenómeno migratorio colombiano a España, advertimos que dicha migración es parte de

un fenómeno mayor, en el cual participan distintos colectivos de extranjeros comunitarios y extracomunitarios, cuyo crecimiento ha sido especialmente acelerado a partir de las últimas décadas del siglo pasado y principios del siglo XXI¹. Dicha situación ha convertido al país ibérico, en poco más de veinte años, en un país de inmigrantes (Cachón, 2002). Sin embargo, la migración internacional colombiana a este país forma parte de una historia migratoria de mayor profundidad en el tiempo cuyo capítulo más reciente ha puesto a España como el destino más actual de la historia de la migración colombiana internacional.

1. ESPAÑA Y COLOMBIA: ESCENARIOS PARA LA CONFIGURACIÓN DE LA MIGRACIÓN INTERNACIONAL

Como punto de partida proponemos revisar un primer nivel de caracterización que corresponde a los factores y rasgos de nivel macro tanto en España como en Colombia. De modo que un primer hecho destacable es la conversión de España en uno de los destinos preferidos de la migración internacional reciente, en general, y de la migración colombiana, en particular.

La configuración de España en un país de inmigrantes se relaciona con una serie de cambios y transformaciones que han tenido lugar en las últimas décadas. La explicación tiene sus antecedentes en la transformación política de los años setenta y un notable desarrollo económico en el marco de la incorporación a la Unión Europea en la década de los ochenta². Al mismo tiempo, las transformaciones demográficas como el envejecimiento de la población³, la mayor incorporación de las mujeres españolas al mercado de trabajo⁴ y el aumento del nivel educativo de la población española en edad de trabajar, entre otros factores, ha supuesto la creación de nichos de trabajo de baja aceptabilidad para los nacionales (Cachón, 2002; 2006).

La rápida transformación económica del país provocó una importante modificación de la estructura económica y social que se tradujo en nuevos desafíos y retos para el conjunto de la sociedad. La particularidad de estos cambios, a diferencia de otros países de la región, es que han ocurrido en un reducido periodo de tiempo, en poco más de dos décadas, lo que, por un lado, ha creado nuevas necesidades y, por otro, ha obligado a tomar medidas de manera casi paralela y, a veces, tardía al surgimiento de los nuevos fenómenos.

Uno de los impulsos más notables de este crecimiento económico ha sido la generación de oportunidades de empleo⁵, hecho que se tradujo en

un aumento de la demanda de trabajadores en general, en un contexto de disminución de la población en edad de trabajar como hemos señalado (León, 2004)⁶. En el marco de este impulso económico, uno de los sectores económicos de mayor crecimiento ha sido la construcción, lo que ha dado lugar al llamado *boom* inmobiliario⁷. Asimismo, el sector de servicios ha experimentado uno de los crecimientos más importantes en los últimos años ganando peso en términos de volumen y producción de empleo creando los llamados "nuevos yacimientos de empleo" (Cachón, 1997). La agricultura, por su parte, sobre todo en las zonas mediterráneas, es uno de los sectores de mayor dinamismo debido a los nuevos requerimientos globales de consumo. La necesidad de disponer de mano de obra abundante, flexible y temporal ha favorecido la incorporación de la fuerza de trabajo extracomunitaria al jornalerismo agrario (Pedone, 2006: 56).

Todos estos cambios implicaron una reestructuración de la demanda laboral y un creciente proceso de dualización del mercado de trabajo. Hacia la década de los noventa se registra un acelerado desajuste entre la deseabilidad de trabajo por los autóctonos y un aumento de la demanda de mano de obra (Cachón, 2006). La política migratoria española incentiva el ingreso al mercado de trabajo español hacia ocupaciones menos valoradas como el servicio doméstico, el cuidado de niños y ancianos, entre otros, las que están reflejadas en el *Catálogo de ocupaciones de difícil cobertura* (Aparicio y Roig, 2005).

En el caso de las mujeres migrantes la posibilidad de acceder a ocupaciones "femeninas" ha favorecido la entrada de inmigrantes, especialmente latinoamericanas, al mercado de trabajo (Parella, 2000; 2003; 2005). Los cambios al interior de la familia española, por la mayor participación de las mujeres nacionales en el mercado de trabajo, ha convertido la estrategia de la externalización del trabajo doméstico en una alternativa que disminuye la sobrecarga femenina en un contexto de lentas transformaciones de género al interior del hogar (Alberdi, 1999; Alberdi, Escario y Haimovich, 1984; Tobío, 2005).

Al revisar las características de Colombia como país emisor de migración a España es necesario advertir que dicho fenómeno no puede verse de modo aislado, sino adscrito a los cambios del contexto mundial, particularmente como fruto de la globalización. El incremento notable del flujo migratorio colombiano en los últimos diez años no lo convierte en un caso excepcional; igual que en el resto de países de América Latina, las políticas neoliberales y los planes de ajuste estructural, aplicados desde la década de los ochenta, impactaron su desarrollo generando, entre otras cosas, un alto crecimiento del trabajo informal y de las tasas

de desempleo, factores que han sido considerados como propiciatorios de la emigración. Así, la migración deviene en una opción de mejoramiento de las condiciones de vida que iban deteriorándose progresivamente (Ardila, 2006: 30).

Pero la emigración de la población colombiana al exterior no es reciente, ni es el resultado mecánico de la crisis económica; constituye un proceso que ha ido en aumento particularmente desde 1960, periodo en el que se registra una salida significativa de colombianos hacia Estados Unidos y Venezuela. Su incremento progresivo, si bien ha sido asociado a razones explicativas derivadas del impacto de la crisis económica, está vinculado también a otros factores, particularmente en la reciente coyuntura, como a los motivos de seguridad relacionados con el conflicto interno y a la flexibilidad de las políticas migratorias en los países de destino (Cárdenas y Mejía, 2006)⁸.

El contexto en que se sitúa la migración de colombianos al exterior, particularmente en la década de 1990, está marcado por dos cambios fundamentales en la vida nacional: de un lado, en materia económica, la adopción de las medidas de corte neoliberal, especialmente la llamada apertura económica y la consecuente liberalización de las importaciones y los procesos de privatización⁹; de otro lado, en materia política, la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, como símbolo de un nuevo pacto político necesario, para hacer frente a la agudización del conflicto armado y la consecuente promulgación de la Carta Constitucional de 1991.

Algunos estudios coinciden en afirmar que la motivación fundamental de los colombianos para emigrar es la búsqueda de mejores condiciones económicas y de oportunidades laborales (Ardila, 2006; Garay, 2008; Guarnizo, 2003), lo que significa que el telón de fondo de una salida como la migración es la difícil situación económica que han enfrentado los colombianos en los últimos años y las pocas opciones para superarla. En efecto, la paradójica situación colombiana que mostró, incluso durante la crisis de la deuda de los años ochenta respecto a los demás países de América Latina¹⁰, una evolución económica sostenida, acompañada de una estabilidad institucional en medio de una situación de violencia permanente, mostró hacia finales de la década de 1990 una profunda crisis económica, que afectó sin duda a todos los sectores sociales. Sin embargo, la reforma económica colombiana fue tardía y sus consecuencias económicas y sociales menos dramáticas, en comparación con los demás países de la región.

Como sugiere Saskia Sassen (2004), en algunos casos, más allá de que un país haya enfrentado un proceso sostenido de pobreza y desempleo, la

emigración sólo se dispara a partir de eventos o sucesos particulares (procesos migratorios ligados a desastres naturales, dictaduras, genocidios, etc.). En este sentido, un hecho coyuntural importante, como la recesión económica colombiana de finales de los noventa, podría interpretarse como el evento crítico desde el cual se puede evaluar la intensidad del fenómeno migratorio durante este periodo. Sin embargo, la dinámica migratoria es parte de una crisis resultante de la articulación entre la implementación de la agenda reformista y su gestión y viabilidad política, esto significa que la crisis en sí no puede entenderse como efecto de fuerzas exógenas (distorsiones en los mercados financieros globales o en los precios internacionales de los principales productos de exportación), sino como el resultado de una particular tendencia política que, en el caso colombiano, pone en evidencia la incapacidad institucional y de las elites socioeconómicas para atender las demandas y expectativas sociales cerrando, gradualmente, las oportunidades de llevar una vida digna a grandes sectores de la población.

Es posible afirmar que la crisis económica colombiana, y sus rasgos específicos al final de los noventa, reactivaron una situación de pobreza y exclusión existentes deviniendo en un factor detonante de la creciente salida de trabajadores colombianos hacia los mercados laborales de Estados Unidos y Europa, especialmente, hacia España. Con este enfoque explicativo no desestimamos otras dimensiones del proceso, al contrario, pretendemos ponderar el peso efectivo de las hipótesis economicistas en la interpretación del fenómeno migratorio y despejar el camino para observar la convergencia de factores diversos, particularmente, el funcionamiento de las redes transnacionales que viene jugando un papel importante en la expansión y sostenimiento de la migración.

Los programas de ajuste estructural, privatización y promoción de exportaciones desarrollados durante este periodo estuvieron inscritos en un marco sociopolítico contradictorio y conflictivo —Constitución de 1991 y agudización del conflicto armado—, y no lograron superar el estancamiento económico; por el contrario, su costo social en términos de incremento de la desigualdad social, persistencia de la pobreza y el desempleo, así como los bajos salarios ha sido elevado. En este escenario de pérdida de oportunidades socioeconómicas y precariedad del conjunto de derechos ciudadanos, la decisión migratoria aparece cada vez más como una estrategia individual y colectiva de superación de tal situación.

Se deriva de aquí que la crisis económica transformó una recurrente situación de pobreza y exclusión, en un factor detonante de la migración, lo cual no supone que pueda establecerse una lectura mecánica de la relación

entre crisis y migración; por el contrario, las crisis deben ser entendidas entonces como el contexto de oportunidad en el que los actores sociales definen estrategias, movilizan sus redes y capitales sociales, y despliegan iniciativas tendientes a enfrentar y recomponer sus condiciones de vida. El deterioro de los niveles de vida no se corresponde directamente con el proceso migratorio, por cuanto es preciso considerar las mediaciones propiamente sociales que se establecen entre el nivel estructural y el nivel de la decisión racional de cada actor¹¹.

Además, si bien la crisis colombiana reciente muestra en materia económica rasgos específicos que la distinguen de otras coyunturas, revela también la persistencia de un patrón histórico de exclusión. En efecto, son visibles los rasgos de desigualdad e inequidad que han caracterizado el desarrollo socioeconómico colombiano: el crecimiento y extensión de la pobreza que alcanza hoy a un alto porcentaje de su población, los elevados niveles de concentración de la riqueza, las disputas por el control y explotación del territorio¹² son, entre otros, factores que están en la base del deterioro de las condiciones económicas de la población colombiana, pese al reciente crecimiento de su economía.

La economía colombiana ha mostrado un crecimiento sostenido, expresado en un aumento del PIB entre 2004 y 2007, que alcanza para este último año un crecimiento del 7,5 por ciento (Banco de la República, 2008), sin embargo, este crecimiento no ha modificado todavía este patrón histórico de desigualdad y exclusión de amplios sectores poblacionales¹³.

El informe del director del Departamento Nacional de Planeación de 2006 muestra una evolución positiva de la pobreza (en el último año cayó en un 3,5 por ciento), explicada entre otras cosas por el crecimiento de la economía que resultó ser un factor efectivo —pero no suficiente— en la reducción de la pobreza. La situación colombiana en esta materia no es ajena al comportamiento latinoamericano que, para 2006, muestra un sostenido crecimiento económico que ha favorecido la disminución de las tasas de pobreza (36,5 por ciento) e indigencia (13,4 por ciento) en el continente, representando los niveles más bajos desde 1980 (CEPAL, 2007: 51). Sin embargo, la evolución de la pobreza en Colombia muestra para el segundo trimestre de 2005 que un 49,2 por ciento de la población vive en niveles de pobreza y un 14,7 por ciento en condiciones de indigencia, lo que representa en términos reales que el 63,9 por ciento de la población colombiana vive en condiciones de pobreza (Montenegro, 2006).

Esta condición de precariedad económica está asociada, sin duda, a la decisión migratoria, si bien estaría por estudiarse la magnitud de su

impacto real, pues la convergencia de otros factores, como lo hemos señalado antes, tiene también importancia.

El deterioro socioeconómico de sectores importantes de la población colombiana, encuentra además un marco de inseguridad e incertidumbre a partir de la agudización del conflicto interno y la expansión de las acciones de los distintos actores armados por toda la geografía nacional.

Para el decenio de 1980, Colombia enfrentó una crisis sin antecedentes que puso en evidencia la articulación de problemas estructurales no resueltos con fenómenos coyunturales como la expansión de la insurgencia, la emergencia y consolidación del paramilitarismo y el impacto del narcotráfico (Leal y Zamosc, 1990). La Constitución de 1991 emerge como una salida a la agudización de la crisis colombiana, en el presupuesto de constituirse no sólo en un marco normativo nuevo, sino en la intención de convertirse en un nuevo pacto social. Sin embargo, y pese a los espacios de participación y afirmación ciudadana concebidos en la Carta Política, las transformaciones estructurales, específicamente en materia económica, no se concretaron, y la fórmula de Estado Social Derecho en ella consagrada, mostró prontamente sus límites al enfrentarse al marco de medidas neoliberales y procesos de privatización emprendidos en la misma época.

Una década después, los balances sobre el impacto y los alcances de la reforma constituyente en Colombia mostraron que pese a los logros en materia de institucionalidad democrática y de participación política de sectores tradicionalmente marginados, ello no se traducía en cambios significativos con relación a las condiciones socioeconómicas, así como tampoco en el campo de las oportunidades de sectores sociales marginales, que continuaban sin acceder a los beneficios del desarrollo. De nuevo, un clima de incertidumbre derivado de la permanencia de grandes brechas sociales puso de presente lo inaplazable de medidas conducentes a una transformación real de los niveles de desigualdad social e inequidad predominantes. Los inicios del siglo XXI muestran en Colombia los límites de una agenda reformista inconclusa, exacerbada por una nueva crisis de la sociedad y el Estado, emparentada con la recesión de los últimos años de la década de los noventa y el escalamiento del conflicto armado.

Específicamente, la intensificación del conflicto colombiano en los años más recientes, se ha explicado de manera particular como resultado del impacto del proceso de reorganización de los grupos contrainsurgentes ilegales y su expansión territorial. El paramilitarismo ha estado asociado a distintos fenómenos: a una respuesta de autodefensa

frente a las acciones de extorsión económica de la guerrilla; a una estrategia de los sectores dominantes para garantizar la marcha de obras de infraestructura y la seguridad de zonas ganaderas o de regiones con algún interés económico significativo; a la incapacidad ofensiva y defensiva de las fuerzas militares oficiales y a una estrategia de maximización de la lucha contrainsurgente, favorecida por la posibilidad de recurrir a unidades militares irregulares y a métodos no convencionales.

El fortalecimiento y expansión de las organizaciones contrainsurgentes y los cambios en el tipo de estrategias de guerra usados por la insurgencia derivó en una exacerbación del conflicto armado en distintas regiones del país. Este escalonamiento del conflicto ha supuesto la utilización, cada vez más frecuente, de estrategias como el desplazamiento forzado de población y de nuevas formas de dominio sobre las localidades, particularmente de las fuerzas contrainsurgentes que han buscado consolidar su presencia o asegurar su permanencia, a través de la creación de redes sociales de apoyo y de la formación de entramados mafiosos en la propia esfera de los poderes económicos y políticos del país¹⁴.

La riqueza y el desarrollo han sido ejes en torno a los cuales la lucha por el control territorial ha tenido especial importancia. Territorios de cultivos ilícitos y polos de producción de sustancias prohibidas, zonas de producción minera, regiones epicentro de proyectos de infraestructura, fuentes de recursos naturales, tierras aptas para la agricultura o la ganadería extensiva o territorios considerados de importancia geoestratégica, han sido objeto de interés y confrontación de grupos insurgentes y fuerzas contrainsurgentes, de acciones militares y hostilidades que han detonado, finalmente, el desplazamiento de la población o han inducido estrategias de repoblamiento de localidades enteras.

En el mismo sentido, la llamada "urbanización"¹⁵ del conflicto político armado como una nueva fase de la guerra irregular en Colombia que se desplaza hacia las ciudades, las convierte en objetivo geoestratégico y no sólo como escenario de actores armados de diverso signo. Las ciudades colombianas, grandes e intermedias, se han visto abocadas a la presencia simultánea de múltiples violencias; violencias diversas que recorren todos los espacios de la ciudad, pero que han trazado unas dinámicas de territorialización en la cual los barrios y zonas populares son utilizados por los actores armados y han servido para desviar las responsabilidades y la participación de otros sectores en la activación de dichas violencias.

No obstante, mediando la primera década del siglo XXI, la situación del conflicto armado presenta importantes variaciones. En primer

lugar, hay un fortalecimiento de la capacidad militar de la fuerza pública, iniciado durante los últimos dos años del Gobierno de Andrés Pastrana (2000-2002), pero especialmente enfatizado durante los últimos cinco años por el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez. En segundo lugar, el proceso de desmovilización de los grupos paramilitares reporta importantes giros en la lógica del conflicto¹⁶. Al parecer, el fortalecimiento de la fuerza pública y el proceso de desmovilizaciones, en particular el de desmovilización colectiva de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)¹⁷, se encuentran estrechamente relacionados con la disminución de las cifras generales de violencia y criminalidad.

Sin embargo, la elaboración de un balance más preciso sobre la condición actual del conflicto armado y sobre el impacto real de aquellos procesos sobre la misma confrontación y sobre la situación de las poblaciones afectadas podría ser aún muy apresurada. Especialmente si se atiende, por ejemplo, a los informes sobre los desafíos de la reinserción de desmovilizados, el rearme paramilitar o el surgimiento de nuevos grupos¹⁸; y por supuesto, si se considera la persistencia y aun el incremento del desplazamiento interno¹⁹.

Ahora bien, resulta conveniente un examen diferencial del impacto de todos estos factores en razón de la diversidad regional colombiana; esto significa que junto a los factores estructurales señalados en los órdenes económico y político es importante considerar rasgos específicos de los contextos en espacios micro, en este caso en el AMCO y en el AMVA, en el horizonte de establecer una relación más directa entre los móviles de la migración y la decisión de emigrar. Ambos escenarios forman parte de una región identificada en el país por el proceso de colonización antioqueña con predominio de la economía cafetera y los procesos de industrialización; en ambos contextos, ha tenido arraigo el narcotráfico y han sido visibles sus diferentes impactos, y han tenido presencia distintas formas de violencia urbana. Rasgos específicos de la evolución reciente de estas dos subregiones estarían asociados a las razones explicativas del incremento de la migración con origen en estas ciudades, de ahí la importancia de una agenda de investigación que se ocupe de estos aspectos.

De otro lado, es preciso señalar que igual importancia tendría el análisis de las condiciones del orden internacional que afectan la dinámica colombiana, por cuanto forman parte también del contexto en el que se inscribe el proceso migratorio. En efecto, la dinámica externa, a la que no está ajena Colombia, muestra nuevas formas de interacción transnacional que vienen modificando los distintos procesos aquí señalados, particularmente en lo relacionado con el devenir del conflicto

colombiano, inscrito en esta coyuntura en el marco de las nuevas conflictividades globales.

En este contexto, la agenda de seguridad hemisférica focalizó la región andina como un área estratégica para las operaciones de lucha contra las drogas y contra el terrorismo; si bien esta región ha sido concebida desde hace más de una década como escenario de la guerra contra el narcotráfico, es con el Plan Colombia²⁰ y con la Iniciativa Regional Andina (IRA), aprobada por el Congreso de los Estados Unidos, que se concreta este propósito (Ahumada y Durán, 2004; Pizarro Leongómez, 2004). Sin embargo, se han producido cambios importantes en esta agenda y en las relaciones entre los Gobiernos de países andinos que plantean nuevos desafíos a las respuestas internacionales frente al conflicto armado, a la situación de desplazamiento forzado interno en Colombia, a la migración hacia los países vecinos y a los flujos económicos ilegales.

Adicionalmente, es creciente la influencia de economías ilegales, en parte por la importancia estratégica de la región, la rápida diversificación de fuentes de financiación del crimen organizado, su expansión y las nuevas alianzas de estas estructuras con los grupos armados irregulares que operan allí. Esta situación ha detonado una mirada "securitizada" de los flujos migratorios desde Colombia hacia los países vecinos, y ha orientado cambios en las políticas de asilo de estos Gobiernos con el propósito de reducir el volumen de los flujos migratorios transfronterizos. De este modo, en el contexto de la globalización, la creciente movilidad de los colombianos se presenta en medio de una contradicción creciente entre la tendencia a una apertura y flexibilización a la circulación de capitales y productos, mientras se adoptan medidas de restricción y represión a la circulación de las personas.

En síntesis, el incremento significativo de la migración colombiana desde los años noventa está asociado a múltiples factores internos y externos, estructurales y coyunturales. De una parte, y como se señaló atrás, el deterioro de la economía nacional como consecuencia de la introducción de profundas reformas neoliberales y la consiguiente precarización de las condiciones de vida de sus habitantes. De otra parte, el país enfrentó una difícil situación sociopolítica agravada por el conflicto armado interno y por la consolidación y expansión del tráfico de drogas ilícitas, lo que estimularía la salida de colombianos al exterior —si bien no puede afirmarse que exista una conexión directa entre la emigración y el narcotráfico—²¹. Simultáneamente, se fueron conformando redes sociales transnacionales que facilitaron el camino a los flujos migratorios recientes (Guarnizo, 2003). En un escenario de tal complejidad, descifrar

las lógicas de la migración internacional y los distintos impactos sobre las formas familiares es un desafío científico de primer orden, el cual por supuesto no se agota en esta investigación.

2. MEDELLÍN, PEREIRA Y MADRID: CIUDADES UNIDAS POR LAS FAMILIAS TRANSNACIONALES

Un segundo nivel de caracterización de los contextos en que ocurre la migración de colombianos a España corresponde al escenario local en uno y otro lado del Atlántico. Es el ámbito ciudadano en que se desarrolla el vínculo transnacional de familias colombianas en España que corresponde a las ciudades de Madrid, Medellín (AMVA) y Pereira (AMCO). El objetivo de este apartado es caracterizar dichos espacios para comprender las particularidades de la migración y de la configuración de familias transnacionales.

Madrid, la capital del Estado español es una de las ciudades con mayor concentración metropolitana, mayor crecimiento económico nacional de los últimos años y uno de los principales polos de atracción de inmigrantes. Según datos del Ayuntamiento de Madrid, hacia el 1 de julio del año 2008 los extranjeros empadronados suponían el 17,3 por ciento (566.392 personas) del total de la ciudad. La Comunidad de Madrid alcanzó una cifra de 854.232 extranjeros empadronados según los datos del padrón municipal a 1 de enero 2007, según los datos del Observatorio Regional de Inmigración (Comunidad de Madrid, 2007: 11).

La migración colombiana a España presenta un rápido y sostenido crecimiento desde fines del siglo pasado hasta la primera década de la nueva centuria. Según los datos, este aumento fue de "casi 18 veces el número de colombianos residentes, de 13.214 personas en 1999 a 246.610 en junio del 2007" (Garay, 2008). El periodo de mayor crecimiento fue entre los años 2000 y 2001, experimentando una disminución a partir del año 2002 cuando el Gobierno español exigió visado a los nacionales colombianos para ingresar al país. Con todo, el colectivo colombiano se ubica entre los mayores contingentes de extranjeros en el país ibérico, alcanzando la cuarta mayoría respecto del total con 282.635 personas (6,3 por ciento del total de extranjeros), de acuerdo a datos más recientes (MTIN, 2009: 5). Respecto a las fuentes colombianas, éstas estiman que viven en España alrededor de 738.000 personas (Hispanista, 2006; Puyol, 2006). Al revisar las cifras acerca de la magnitud de la migración colombiana, éstas revelan que la región de nacimiento del colectivo colombiano

en la Comunidad de Madrid está altamente concentrada en AMCO con un 25 por ciento, Bogotá 20 por ciento, Antioquia 16 por ciento y Valle del Cauca 14 por ciento. Según registran los datos, AMCO representa la principal región desde donde se originan los flujos migratorios a España y, por lo tanto, con mayor porcentaje de hogares con miembros en el exterior, en España con un 54 por ciento, y en la Comunidad de Madrid un 25 por ciento, superando el porcentaje de aquellos que migran de la zona del AMCO hacia los Estados Unidos (Garay, 2008). Por otro lado, el departamento de Antioquia, y en concreto el área AMVA, es otra de las áreas desde donde migran hacia la Comunidad de Madrid un gran número de personas de los hogares transnacionales aquí analizados, si bien no contamos con estudios similares sobre esta participación.

En esta investigación subrayamos como una dimensión importante del contexto las condiciones socioeconómicas derivadas de la crisis de mediados de los noventa y sus particularidades en dos escenarios concretos: el Eje Cafetero y el AMVA. Los rasgos específicos de estos dos escenarios los inscribimos más allá de su condición espacial, es decir, entendemos los asuntos relacionados con el territorio como el entramado de relaciones económicas, políticas, sociales y culturales que definen su lógica de desarrollo y que, para nuestro caso, reviste especial importancia en función de las condiciones que propician, facilitan o estimulan la migración internacional.

Por ello, y pese a que la migración colombiana hacia España está definida especialmente por estas transformaciones socioeconómicas de los contextos, nos referimos brevemente a las transformaciones sociopolíticas, en especial a la coyuntura constituyente de inicios de los noventa y a la agudización del conflicto en esta misma época, elementos que no podríamos desestimar en el análisis de las condiciones particulares del caso colombiano articuladas, además, a la dinámica económica.

Igualmente, y dada la orientación de la investigación, incluimos algunos aspectos socioculturales, referidos a las tendencias y transformaciones de la familia y a la estructura de género en la sociedad colombiana, en la perspectiva de considerar ese contexto familiar, previo a la migración susceptible de transformación por efecto de la migración y las remesas, tal como se mostrará a partir de la sistematización y el análisis de la información recabada en esta investigación.

El AMCO está conformado por los municipios de Pereira, Dosquebradas y la Virginia, y forma parte del departamento de Risaralda, en el epicentro del Eje Cafetero colombiano, donde se concentra cerca del 50 por ciento de la producción de café del país.

El auge que vivió la producción de café y la bonanza derivada de su precio internacional, en décadas anteriores, representó para la región el desarrollo de infraestructura de servicios, altos índices de calidad de vida de su población y un impacto importante sobre las finanzas nacionales (Toro, 2004). Pero esta situación sufrió una profunda crisis durante los años noventa desatada por la convergencia de diversos factores: en el plano económico confluyen el deterioro de la economía cafetera regional con una recesión generalizada a nivel nacional; se produce una mayor presencia e impacto del conflicto armado, se da una expansión del narcotráfico; adicionalmente, el terremoto de 1999 deja una serie de consecuencias económicas y sociales que agravan la situación (Medina, 2007). Esta crisis se constituye en el telón de fondo de nuevas situaciones problemáticas: el crecimiento de la economía informal, los altos índices de violencia y criminalidad, el auge de la prostitución y la trata de personas y el crecimiento sostenido del desplazamiento forzado de población, entre otras.

Así, a una histórica tendencia a la movilidad poblacional en esta región, se suman en la más reciente coyuntura nuevas dinámicas que favorecen el flujo de población interna y externa. En efecto, el Eje Cafetero ha sido una región receptora y expulsora de población; desde su proceso de poblamiento a partir de la colonización antioqueña y como resultado de un intenso flujo migratorio de población fluctuante, agricultores y recogedores del grano acudían desde diferentes regiones de Colombia en épocas de cosecha. Si bien es cierto que un número de ellos se establecieron en la zona, una buena proporción mantuvo su condición itinerante.

Asimismo, particularmente en el último decenio, crece significativamente el flujo migratorio al exterior, principalmente hacia España y Estados Unidos. Algunos investigadores han señalado este fenómeno como parte de una estrategia familiar para enfrentar los diferenciales impactos de la crisis (Garay y Rodríguez, 2005). De igual manera, el mandato popular "emigre para que rebusque" se incorpora a la cultura popular, alimentando el imaginario social con unas expectativas que exaltan las posibilidades reales de acceder a cambios en las condiciones vigentes, a partir de la "aventura" migratoria (Toro, 2004).

Si bien hay pocos estudios empíricos que expliquen el fenómeno migratorio, particularmente en origen, el diagnóstico elaborado por Garay y Rodríguez (2005), ofrece un panorama explicativo de la situación del AMCO de Colombia. De acuerdo con este estudio, la salida de población desde la región se acelera a partir de la segunda mitad de la década de los noventa: hacia 2004 cerca de un 5 por ciento de su población había

emigrado; del total de hogares de la región (134.928) a finales de 2004, 19.272 tenían uno o más miembros residiendo de manera permanente en el exterior, lo que se traduce en 25.733 personas migrantes internacionales de un total de 520.527. Estas cifras permiten inferir que si bien es cierto que los flujos migratorios internacionales no son un fenómeno reciente para AMCO, se evidencia que la agudización de la crisis local, en la década de los noventa, ha convertido a la región en un importante polo de emigración internacional, al punto que Risaralda se constituye en el departamento colombiano con el mayor índice de intensidad migratoria internacional (3,59 por ciento), según datos del Censo de 2005.

El mismo estudio nos permite afirmar que las razones para migrar son de índole económica, seguidas por motivos familiares. Entre los factores económicos sobresale el deterioro de la situación económica en la comunidad de origen, la búsqueda de empleo e ingresos, el mejoramiento de la calidad de vida para sí y su familia. En lo que se refiere a los motivos de índole familiar, sobresale la reagrupación con familiares en España. Pese al incremento relativo de la violencia en la región, el clima de inseguridad derivado de los problemas asociados a la mayor presencia del narcotráfico, la delincuencia organizada y la violencia guerrillera, los autores consideran que los datos no avalan factores asociados al clima de inseguridad y violencia que se vive. Sin embargo, sería necesaria una mayor profundización al respecto.

A esta aceleración de los volúmenes en los flujos migratorios se suma el cambio en el destino migratorio. A partir del segundo quinquenio de los noventa, España aparece como destino principal, sin embargo Estados Unidos mantiene innegable importancia. El número de migrantes de AMCO hacia España se multiplica por 36,5 entre 1990 y 2004, mientras que hacia Estados Unidos lo hace por 2,72 veces durante el mismo periodo. En el mismo estudio, los autores encuentran que en ambos países se evidencia una fuerte concentración de migrantes en muy pocas ciudades. Con relación a las ciudades de residencia de los migrantes recientes y no recientes, es preciso anotar que para los recientes ha aumentado la importancia de ciudades españolas (Madrid aglutina al 30,9 por ciento de los migrantes recientes y Barcelona el 5,5 por ciento), mientras que Nueva York, que concentraba la cuarta parte de los migrantes anteriores a 1998, sólo agrupa al 8,1 de los que migraron posteriormente al año 2000. Resalta el hecho de que el 5,4 por ciento de los hogares a los que pertenecían los migrantes no recientes —antes de emigrar— desconocen el lugar donde éstos residen actualmente (Garay y Rodríguez, 2005; Medina, 2007).

Por otro lado, y para el caso del AMVA, desde comienzos de la década de los setenta, se abre paso una pérdida de influencia de la región antioqueña en el ámbito nacional. La supuesta pérdida de liderazgo fue explicada en razón de una crisis de grandes proporciones, que el imaginario social asoció a una crisis moral por pérdida de valores. Lo que en principio desencadenó dicha situación fueron las altas tasas de desempleo, la delincuencia común y el surgimiento del narcotráfico; posteriormente, el incremento de las violencias sería el síntoma fundamental de que algo había entrado en crisis en la sociedad regional. Sin embargo, el estancamiento relativo de la región y la agudización de la conflictividad, no era el producto de una situación local sino que formaba parte de un proceso de cambios económicos y políticos a nivel nacional.

En efecto, el AMVA, con Medellín como capital del departamento de Antioquia, ha vivido, desde principios de los años ochenta, un proceso de desindustrialización que condujo a un decrecimiento de su dinamismo económico, a un aumento de las tasas de desocupación, afectando la calidad del empleo y de vida de muchas personas. El modelo empresarial tradicional se fraccionó dada la forma como comenzaron a descentralizarse algunos procesos productivos en sectores tradicionales, desde grandes compañías hasta pequeñas unidades de producción. La reestructuración del tejido empresarial registrado desde aquellos años hizo que tanto las microempresas como las pequeñas y medianas empresas fueran las mayores generadoras de empleo, aunque muchas de ellas no lograran consolidarse ni dinamizar de manera suficiente el crecimiento de la economía.

El bajo nivel de crecimiento económico y la limitada capacidad de generar empleo de buena calidad han estimulado la economía informal como una forma alternativa de subsistencia o de reducción de costos. Desde los años ochenta, el trabajo informal y el subempleo fueron ganando en participación dentro de la población que se considera ocupada. En 2003, de cada 100 personas ocupadas 62 estaban trabajando en la informalidad²².

Las mayores tasas de desocupación superaron el 20 por ciento en el primer trimestre de 2001, mientras que la más baja en los últimos años se registró en el último trimestre (octubre/diciembre) de 2003 al llegar al 14 por ciento. Por grupos de población, las mujeres y los jóvenes han sido los sectores poblacionales más afectados. Para el caso de las mujeres, las tasas de desempleo superan en muchos casos el 50 por ciento y para la juventud se sitúan entre el 35 por ciento y el 40 por ciento (Alcaldía de Medellín, 2008).

Pero el ambiente de incertidumbre e inseguridad no sólo se derivaba de la difícil situación económica de la ciudad en el último decenio; los altos niveles de violencia precipitados hacia el final de los años ochenta por efecto del narcotráfico y la consolidación de redes del crimen organizados, han persistido en años recientes, pese a la reducción de la tasa de homicidios, particularmente hacia 2003. En efecto, Medellín ha sido una ciudad particularmente afectada por el conflicto armado y la guerra que de tiempo atrás vive el país y que alcanzó, en los últimos años, características dramáticas para la población civil. Particularmente, los jóvenes han sido los más afectados por esta situación de violencia: el mayor número de homicidios se concentra en jóvenes entre los 15 y 29 años, especialmente en los hombres.

La evolución del conflicto armado convirtió a Medellín en un escenario de la guerra en los términos ya señalados. De acuerdo con los datos de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), Medellín es la segunda capital del país en recepción de población desplazada, y a esto se suman los desplazamientos intraurbanos. La atención a la población desplazada proveniente de diversas regiones del país y del departamento exige a la ciudad inversiones crecientes, sin haber logrado hasta ahora los niveles necesarios de coordinación, cooperación y subsidiaridad con el Gobierno nacional y departamental para una mejor atención de esta problemática, que afecta principalmente a mujeres, a niños y niñas. Adicionalmente, esta ciudad ha sido epicentro de desapariciones, secuestros, extorsiones y casos de violación de derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario (DIH).

Recientemente, la ciudad ha vivido varios procesos de reinserción de grupos armados, siendo en la actualidad el más significativo la reincorporación del Bloque Cacique Nutibara de las AUC. Como se señaló antes, un balance de las implicaciones de este proceso, sobre el mejoramiento de la situación de seguridad ciudadana, es un asunto por examinar en términos investigativos. No podría afirmarse entonces, todavía, que el proceso de reinserción ha conducido a un mejoramiento significativo de la situación de violencia en la ciudad, porque entre otras cosas, y como lo señala uno de los estudios desarrollados al respecto, el desarrollo no ha significado una pérdida efectiva del poder paramilitar ejercido sobre las comunidades: "[...] los desmovilizados a pesar de no hacer uso constante de armas, pues como señalan en los barrios: 'ya no hay tantas armas públicas', se conservan en el imaginario de las comunidades como una figura autoritaria que sigue teniendo un peso importante en las relaciones con la comunidad. Y en esa medida, este imaginario les

permite a los desmovilizados reproducir las prácticas de control e intermediación social, con un grado importante de legitimidad por parte de la comunidad” (Instituto de Estudios Políticos, 2007: 69).

A esta situación social de inseguridad, se sumaron problemas de convivencia reflejados también en el aumento de la violencia intrafamiliar y cotidiana, expresión de cambios importantes en la estructura de la familia, inscrita, como lo entendemos aquí, en las transformaciones de distinto orden que ha vivido la sociedad colombiana en la más reciente coyuntura, tal como será analizado más adelante.

En cuanto a la movilidad poblacional característica de la región antioqueña, que ha situado a Medellín como ciudad receptora de población de distintos lugares del departamento y el país, da un giro significativo a finales del siglo XX en función de un crecimiento sostenido de su migración hacia el exterior. Pese a ello, no se cuenta todavía con estudios que examinen en detalle este fenómeno, aunque algunas iniciativas gubernamentales, como la conformación de la Red Sos Paisa, han intentado rastrear el flujo migratorio de los medellinenses particularmente hacia España.

3. LA FAMILIA Y LA ESTRUCTURA DE GÉNERO EN LA SOCIEDAD COLOMBIANA: TENDENCIAS Y CAMBIOS

Un tercer nivel de análisis se relaciona con las familias transnacionales colombianas, que es el actor central de esta investigación. Las condiciones socioeconómicas y políticas hasta aquí señaladas constituyen también el marco explicativo de buena parte de los cambios y tendencias que la familia ha experimentado en los últimos años en Colombia. Hablar de la familia en un país marcado por su extrema diversidad geográfica, cultural y social, en un contexto de cambios como los que venimos señalando, además de ser una tarea difícil resulta inevitable si se considera, como lo hacemos aquí, que la familia es una institución articulada a la sociedad, y en tal sentido, permeada por los cambios de aquélla, sin que por ello se desestime su propia dinámica (Gutiérrez de P., 2000; Henao, 2004; Puyana, 2007).

En este sentido, los complejos y profundos procesos vividos por la sociedad colombiana, a lo largo del siglo XX, impactaron y transformaron las estructuras y las dinámicas familiares que se venían tejiendo lentamente desde épocas anteriores: la “familia patriarcal, extensa y prolífica” como modelo familiar predominante entre los sectores medios y altos, en

contraste con la familia nuclear propia de los estratos bajos, a principios del siglo XX, dio paso a cambios significativos que condujeron hacia los años sesenta a un sostenido proceso hacia la familia nuclear, que retorna hacia finales de siglo a formas funcionales de la familia extensa (Pachón, 2007). En estos movimientos de la familia colombiana se pueden examinar distintos factores explicativos, en los que, sin duda, tiene especial impacto la evolución de la situación económica que hemos esbozado, aunque asociada a factores de orden político, cultural y simbólico igualmente importantes.

Desde mediados del siglo XX se dieron cambios familiares a partir de la reducción del tamaño de las familias, el ingreso de la mujer al mundo del trabajo y la mayor frecuencia de las separaciones entre los esposos. La familia religiosa, legalmente construida y durable, continuaba siendo un ideal en la mente de amplios sectores sociales. Sin embargo, existían múltiples formas alternas de familia, uniones de hecho e hijos naturales no reconocidos legalmente.

El control natal, el incremento de la escolaridad, en especial la femenina, y la emigración de mujeres jóvenes del campo redujeron significativamente los niveles de la fecundidad, en especial hacia la mitad de los sesenta y los ochenta. Durante esta época, si bien la mujer ganó un lugar en el ámbito universitario, profesional, empresarial y obrero, tuvo que enfrentarse a resistencias sociales que cuestionaban una supuesta ausencia del hogar, que empezaba a ser factor explicativo de rupturas familiares y del incremento de problemas con los hijos. Pese a ello, el trabajo remunerado de la mujer empezaba a convertirse en algo necesario para el sustento económico de la familia.

De este modo, la estructura de género presente en la sociedad tradicional comenzaba a erosionarse; los nuevos roles asumidos por la mujer o la transformación del rol tradicional que las confinaba a los oficios domésticos y al ejercicio de la maternidad, fueron el inicio de un proceso de reconocimiento del papel de la mujer en el que ha encontrado diferentes obstáculos. La estructura de poder patriarcal, afincada en la autoridad vertical y emanada por el hombre y el adulto, empezó a sufrir cambios importantes, alterando las uniones familiares y generando transformaciones en las relaciones entre los cónyuges, entre los hermanos y entre hijos y padres.

Simultáneamente, se iban gestando transformaciones en la división sexual del trabajo: al convertirse la mujer en proveedora económica, la especialización detectada a principios de siglo de hombre proveedor y de mujer cuidadora, se transformó en una responsabilidad económica

compartida por los cónyuges y, en muchos casos, asumida por la mujer, sin que se hubiera logrado una redistribución de las tareas en el hogar. El hombre perdió obligaciones, la mujer se recargó de funciones y el Estado no logró garantizar la infraestructura necesaria de apoyo a la familia, con lo cual el trabajo familiar se convirtió en una sobrecarga para la mujer y en una fuente de conflicto entre los cónyuges: "[...] madres solteras, madres que se quedan solas después de traumáticas rupturas familiares, madres viudas de la guerra, o madres desplazadas por las múltiples violencias que se han vivido en el país en los últimos decenios, se encuentran ante la realidad de ser las únicas responsables frente a los compromisos que implican el construir y mantener una familia" (Pachón, 2007). Ahora bien, como lo señalamos antes, las condiciones particulares de los escenarios regionales en Colombia determinan también la tipología de familia predominante, situación que ha sido objeto de estudios importantes, si bien presentamos aquí una caracterización general de la región antioqueña, asumiendo que tanto el AMCO como Medellín comparten una historia común por la vía de la colonización antioqueña. El trabajo de Virginia Gutiérrez de Pineda es de suma importancia para entender el proceso general de mestizaje, y para captar los modelos según los cuales se configuraron las familias de los territorios que han tipificado la colonización antioqueña. En Medellín se vivió en la última década del siglo XX el quebrantamiento del modelo tradicional de la familia antioqueña que sirvió de soporte, en el primer momento, a la mitificada gesta colonizadora; y en el segundo, a la edificación del tipo empresarial paisa²³.

Los procesos migratorios de los últimos cuarenta años en la ciudad se dan en condiciones carentes de alternativas de vida digna. La expulsión del campo, por la violencia rural y pueblerina y la falta de oportunidades laborales se convierten en un factor fundamental de ampliación de los cinturones de miseria en la ciudad. Con la llegada de los primeros miembros de una familia se crean las condiciones para la entrada masiva de nuevos pobladores.

Algunos autores han destacado aspectos relevantes de lo que sería el tipo de familia predominante en Medellín hacia las últimas décadas del siglo XX; a principios de los ochenta, el número promedio de miembros de la familia es de cinco; el padre como proveedor económico único reduce su participación, y correlativamente aumenta la de los hijos y su esposa, siendo esto más evidente a medida que se desciende de estrato social; la madre en los estratos bajos es quien maneja los recursos económicos; se presentan tensiones en los estratos medios y bajos por la

responsabilidad en la provisión económica, el manejo del dinero en el hogar y la realización de las tareas domésticas siguen estando en manos de la madre y las hijas; la centralidad en la familia gira alrededor de la figura materna; los conflictos intrafamiliares aparecen como rasgos comunes en todos los estratos (Henao, 2004; López, 1983; 1998).

Ahora bien, en cuanto hemos entendido la familia como construcción social, consideramos también que desde una perspectiva política esta concepción de la familia se ve enriquecida con los aportes de la perspectiva de género, en cuanto se facilita con ella el reconocimiento de creencias, símbolos, comportamientos y significados culturales que no sólo diferencian hombres y mujeres, sino que desvelan relaciones de poder existentes entre los sexos (Puyana, 2007).

A partir de este enfoque, que cuestiona la tendencia a exaltar a la familia nuclear, patriarcal, heterosexual y monogámica como la única manera de vida en pareja, y con los aportes de la perspectiva de género, se ha buscado situar los rasgos de la familia en relación con los distintos contextos culturales y sociales. Un concepto como el de "formas familiares" (Cicerchia, 1999) nos será útil para este propósito. Asimismo, la redefinición de los roles de hombres y mujeres servirá de espejo para examinar las tendencias seguidas en el caso colombiano.

Hacia mediados del siglo XX, pese a las diferencias regionales, persistía en Colombia una familia patriarcal, con una autoridad centrada en el hombre y definida por jerarquías asociadas a la patria potestad, que definía la dominación del padre en calidad de jefe del hogar y representante de la familia a nivel social, y el carácter subalterno de la mujer. Cambios importantes en la esfera jurídica comenzaron a conceder un lugar diferencial a la mujer, reconociendo sus derechos, lo que empieza a generar un ambiente propicio para transformaciones de la estructura de género predominante:

En los últimos cuarenta años, resaltamos la transformación de las formas tradicionales de división sexual en funciones que marcaban los territorios entre los géneros, así como los simbolismos sociales sobre los cuales se legitimaba la adscripción de la mujer al hogar. Entre estas funciones hallamos un crecimiento sustancial de la participación femenina en el mercado laboral, los avances de la cobertura escolar (particularmente en las ciudades), la disminución de la brecha que diferenciaba la educación por el sexo y el avance de la participación de las mujeres en el sistema universitario. Los patrones sobre los cuales se define la masculinidad también han variado como consecuencia de los

cambios en el rol de la mujer y de las tendencias en la economía de mercado, las cuales han traído consigo un aumento en el desempleo masculino (Puyana, 2007: 273).

Es en este sentido que se crean condiciones para el cambio en las relaciones de género en la familia; no obstante, los cambios en la división sexual de roles no se dan de igual modo, en cuanto persisten resistencias y contradicciones en la forma en la que los padres participan en el ámbito doméstico, comparado con la manera en que las mujeres madres ingresan al mundo laboral; permanecen visiones tradicionales sobre la maternidad como único sentido de la vida de la mujer, así como en la carga del oficio doméstico en las mujeres. El papel asumido por la mujer como proveedora no lleva consigo un cambio definitivo en el papel de los hombres en relación con la asunción de las tareas domésticas.

En estas condiciones, un diagnóstico de la situación de la familia y la estructura de género de la sociedad colombiana muestra tres tendencias. La primera, en relación con la conservación de tradiciones patriarcales que naturalizan el papel de la mujer-madre, confinada a los oficios domésticos, y el papel del hombre como proveedor. La segunda, una tendencia en transición que evidencia cambios lentos en los roles de hombres y mujeres, que muestra que los hombres no terminan por asumir su papel en las tareas domésticas, asumiéndose simplemente como colaboradores de una función que es de la mujer, mientras que las mujeres asumen con propiedad su papel de proveedoras. La tercera representa una ruptura en la que ambos comienzan a asumir los dos roles como actividades compartidas (Puyana, 2007).

En este contexto general de la familia y la estructura de género de la sociedad colombiana ubicada en perspectiva histórica, podemos situar el punto de partida para examinar los cambios y permanencias que se objetivan en función del impacto de la migración y las remesas económicas y sociales generadas a partir de este proceso. La información obtenida en el trabajo de campo no será suficiente para llegar a conclusiones definitivas, pero ilustra algunas tendencias de los cambios que se van generando en una coyuntura interpelada por el crecimiento inusitado de los procesos de movilidad humana. Por lo pronto, entendemos que en las coordenadas de la migración colombiana, las formas familiares, ya de suyo en permanente transformación, vienen sufriendo alteraciones importantes que contribuirán sin duda a redefinir el mapa de relaciones entre hombres y mujeres, entre padres e hijos.

NOTAS

1. De poco más de medio millón de extranjeros residentes entre 1995 y 1996, se pasó a casi dos millones a fines de 2004 y a más de 3 millones en 2005 (Cachón, 2006: 180). Según los últimos datos oficiales de Extranjería e Inmigración del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (MTAS), el número de extranjeros con tarjeta de residencia en marzo de 2008 era de 4.192.835, lo que representa un 9,3 por ciento de la población española, aproximadamente (MTAS, 2008).
2. Los datos señalan que durante el periodo de 1995-2005, el PIB aumentó un 33 por ciento en términos reales, con un incremento anual medio de 3,3 por ciento. Este dato en relación con la población adquiere mayor significación puesto que el PIB per cápita experimentó un aumento mucho mayor, del 6,4 por ciento (IOÉ, 2005).
3. Según estudios, desde 1993 desciende la población activa de 16 años, y en los años subsiguientes va descendiendo la de 17, la de 18, etc. Hacia el año 2005 esta caída afecta a todo el tramo de 16 a 30 años, lo que ya ha supuesto que la incorporación de nuevos jóvenes al mercado laboral haya ido descendiendo progresivamente en los últimos años. "Pero vale la pena resaltar que esta misma dinámica afecta cada nuevo año a un tramo mayor de edad (en 2010 afectará al tramo 16-35, etc.), de forma que los efectos de la caída de la natalidad producidos a partir de 1976 van a ser cada vez mayores, dando lugar a un continuo descenso de la incorporación de nuevos jóvenes (nativos) al mercado laboral. Comparando el periodo 1993-2005 con los anteriores, se ha producido una media de unos 160.000 efectivos incorporándose de menos cada año al mercado laboral, es decir, unos 2 millones en todo el periodo" (Pajares, 2007).
4. Aunque las españolas se incorporan tardíamente al mercado de trabajo, respecto de otros países de la Unión Europea, han seguido pautas similares en términos de aumento en la participación en el trabajo fuera del hogar (Comisión Europea, 2004). Los datos señalan que en 1987 la tasa de participación femenina en el mercado laboral español era de 30,9 por ciento, para pasar a 40 por ciento en 2001 (Parella, 2003: 213) y a un 47 por ciento en el 2007 (INE, 2008: 32).
5. "Según la Encuesta de Población Activa, la economía española ha sido capaz de generar empleo a un ritmo medio anual de más de 600 mil personas desde 1996, con una cada vez mayor incorporación de la población al mercado de trabajo, lo que ha elevado la tasa de actividad total de la economía en el año 2006 hasta más del 70 por ciento desde 61,5 por ciento en 1996" (Oficina Económica de la Presidencia, 2006: 1).
6. España posee la décima mayor esperanza de vida del mundo y la tercera mayor de la Unión Europea (Oficina Económica de la Presidencia, 2006: 18). Según datos del INE más recientes, el grupo de 80 años y más es el que experimenta mayor crecimiento para el periodo 2000-2007, tanto en varones como en mujeres. "Para ambos sexos, la participación de este grupo de edad era de un 3,8 por ciento en el año 2000 y es de un 4,5 por ciento en el año 2007. En el caso de los varones representaban un 2,6 por ciento en el año 2000 y un 3,2 por ciento en 2007, y las mujeres un 5 por ciento en el año 2000 y un 5,8 por ciento en 2007" (INE, 2008: 10).
7. "Entre el año 2000 y el cuarto trimestre del año 2002 la economía española creció un 10,1 por ciento frente al 38,7 por ciento de crecimiento del sector de la construcción. Esto significa que la construcción ha aportado un 26,4 por ciento del crecimiento del PIB español durante los últimos tres años" (García, 2003).
8. Los estudios sobre flujos migratorios colombianos subrayan tres momentos diferenciados de la emigración de colombianos desde el decenio de 1960: la primera, entre 1965 y 1975, constituida por personas provenientes de sectores populares que tuvieron como principales destinos Venezuela, Estados Unidos

- y Panamá; la segunda, entre 1975 y 1985, relacionada con factores como la caída del PIB, el incremento del desempleo, pero también con el auge de las redes del tráfico de drogas ilícitas en Colombia, siendo el destino más importante Estados Unidos; y la tercera, entre 1996 y 2006, cuando se produce un incremento sin antecedentes de los flujos migratorios (cerca de 2,1 millones de personas, según el Departamento Administrativo de Seguridad) de sectores de clase media y alta, y cuyas causas se asocian al deterioro de las condiciones económicas y de seguridad internas del país. En este tercer momento, los destinos se diversifican —Estados Unidos, España y Venezuela, y en menor medida Inglaterra, Ecuador, Canadá, Francia, México y Costa Rica—, mostrando hacia el final del periodo un crecimiento importante hacia España como destino (Cárdenas y Mejía, 2006; CEMLA, 2005; 2007).
9. Un análisis de la crisis económica colombiana en la década de 1990 y su impacto sobre el incremento del flujo migratorio puede verse en el trabajo de Garay y Medina (Garay y Medina, 2007).
 10. El manejo de la deuda externa en el decenio de 1980, representó para América Latina el advenimiento de una crisis económica, social y política sin antecedentes. Para hacerle frente, los Gobiernos latinoamericanos adoptaron un paquete de reformas radicales de corte neoliberal, con impactos sociales de grandes proporciones. Sin embargo, Colombia no vivió una crisis estructural de tal magnitud y adoptó gradual y tardíamente, respecto a los demás países de la región, el paquete de medidas.
 11. Así como en el campo de los estudios sobre movimientos sociales algunos autores han señalado que la miseria, la pobreza, la pérdida de oportunidades económicas no se traducen necesariamente en movilizaciones populares, de igual forma podemos decir, en relación con la dinámica migratoria, que el desempleo, la necesidad económica, el malestar colectivos no activan directamente la decisión y la posibilidad de migrar hacia otro país. Se podría afirmar entonces que las crisis o eventos problemáticos impactan en los patrones sociales de trabajo, en las estrategias familiares de sobrevivencia, de ahorro, de endeudamiento, dando lugar a una recomposición de los medios y los recursos con que los distintos actores gestionan sus condiciones de vida.
 12. Los procesos de adecuación de la tierra al capital y a las necesidades del narcotráfico, han dejado como resultado la consolidación de los patrones de concentración de la tierra, con profundas implicaciones sociales, económicas y ambientales, y configurando lo que algunos analistas denominan como procesos de descampesinización y relativización. A ello se suma la disputa por el control territorial entre los actores armados, en la que el creciente control paramilitar ha significado el despojo de masas de campesinos de sus tierras y el fortalecimiento de la propiedad terrateniente en manos de éstos, ligado por supuesto a los intereses de capital proveniente del narcotráfico (véase: Cubides y Domínguez, 1999; Fajardo, 2000).
 13. Según el Informe de Desarrollo Humano de Naciones Unidas (PNUD, 2005), Colombia se encuentra, en relación con la distribución del ingreso, entre los diez países más desiguales en el mundo y entre los tres más inequitativos de América Latina (junto con Guatemala y Brasil). Desde mediados de los años setenta, la distribución del ingreso por persona ha pasado de 0,47 en el coeficiente de GINI a 0,58 en la actualidad, once puntos por encima de lo observado hace 30 años. Las cifras del indicador de concentración del ingreso GINI para Colombia muestran que para la segunda mitad de la década de los años noventa el coeficiente GINI para Colombia oscilaba entre 0,51 y 0,55, según las diversas estimaciones. Para el año 2000 según cálculos del Departamento Nacional de Planeación, con base en el DANE, el coeficiente de desigualdad GINI fue de 0,56. Colombia aparece así como uno de los países con mayores problemas de desigualdad en la distribución en el ingreso en América Latina. Y aunque su situación no parece tan crítica como en Brasil, el 10 por ciento de hogares más ricos percibe ingresos 30 veces superiores al 10 por ciento de hogares más pobres, una tendencia muy cercana a la de Venezuela (30,5 veces) y mucho menos satisfactoria que la de México (24,5 veces) y la de Perú (18 veces). Estos crecientes niveles de desigualdad son la causa fundamental del aumento de los niveles de pobreza durante esos años. En 1992, el 10 por ciento más rico de los hogares percibía 33 por ciento del ingreso total, cinco años más tarde concentra el 58 por ciento del ingreso total. Como consecuencia, entre 1996 y 1999 aumentó de 53,8 por ciento al 60,1 por ciento el número de hogares que se encontraban por debajo de la línea de pobreza (DANE, 2000).
 14. Estudios recientes han documentado el proceso de consolidación de la estructura paramilitar en Colombia, su impacto sobre el conflicto, su inserción en la sociedad y su participación en la política (véase, entre otros, Cubides y Domínguez, 1999; García-Peña, 2005; Pizarro Leongómez, 2004; Romero, 2003).
 15. Véase Naranjo Giraldo, 2004; Pérez, 2005.
 16. El Vigésimo Primer Informe de Control y Seguimiento a los desmovilizados de los grupos armados ilegales establece que desde 2003, año en que se iniciaron las desmovilizaciones, hasta el 29 de febrero de 2008, abandonaron las armas 46.658 miembros de la guerrilla y de las autodefensas, 31.671 de los cuales, pertenecientes a las AUC, lo hicieron en forma colectiva, mientras que individualmente retornaron a la vida civil 8.847 integrantes de las FARC, 3.682 de las AUC, 2.014 del ELN y 444 disidencias. Igualmente, durante todo el proceso de desmovilización las acciones de la Fuerza Pública han permitido la captura de 1.707 desmovilizados que optaron por engrosar las filas de la delincuencia, 21 de ellos en febrero de 2008, a la vez que en el lapso 2003-2008 han perecido en combate 819 individuos, 22 de los cuales sucedieron en el segundo mes del presente año (Ministerio de Defensa, 2008).
 17. El paramilitarismo en Colombia adquirió mayor relevancia hacia los años ochenta del siglo XX, cuando se autodefinen como fuerza contrainsurgente. En su evolución adopta la forma de una federación armada ilegal, estructurada jerárquicamente sobre una historia, unos intereses y unos objetivos comunes, conocida desde 1997 como Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Posteriormente se convierte en una federación de agrupaciones regionales con una débil articulación entre ellas y con íntimos vínculos con el narcotráfico, cuestionando así su unidad política, orgánica y estratégica que condujo a una etapa de disolución y reagrupamiento desde 2001 y a su reposicionamiento como estructura confederada de grupos y bloques autónomos en 2003 (Romero, 2003; Alonso, Giraldo y Sierra, 2005). En carta pública enviada al presidente de la República el 29 de noviembre de 2002, las AUC declararon un cese de hostilidades con alcance nacional, a partir del 1 de diciembre de ese año, iniciándose así el proceso de Desmovilización, Desarme y Reinserción (DDR) el cual implicó un proceso de negociación con el Gobierno nacional.
 18. Véanse INDEPAZ, 2007; MAPP/OEA, 2007; 2007; Medina, 2008; PNUD, 2007; Theidon y Betancourt, 2006.
 19. Según el reciente informe del Centro de Control de Desplazamientos Internos (IDMC) (dependiente de la ONG Consejo Noruego de Refugiados, que cuenta con el auspicio de ACNUR, la alta comisaría de la ONU para los Refugiados), Colombia es hoy el segundo país del mundo con mayor número de desplazados internos, "con casi 4 millones en 2007, sólo superado por los 5,8 millones de Sudán. La cifra de 4 millones se basa en las estimaciones de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), y difiere un tanto de

- los cálculos del Gobierno, que sitúa el número de desplazados en 2,38 millones en enero de 2008. 'Pero el propio Gobierno reconoce que hay un 30 por ciento de subregistro de desplazados', dijo Arild Birkenes, autor del capítulo latinoamericano del informe" (Univisión, 2008).
20. El Plan Colombia (2000) llamado posteriormente Plan Patriota (2004) fue concebido como un acuerdo bilateral entre los Gobiernos de Estados Unidos y Colombia para combatir el narcotráfico, fortalecer la democracia, aportar al desarrollo, contribuir a la paz y a la protección de los derechos humanos, para el cual Estados Unidos aprobó una ayuda militar y económica para Colombia, sin antecedentes en la región.
 21. Al respecto es importante examinar la forma en que algunos autores establecen esta relación. *Cfr.* William Mejía Ochoa (Mejía, 2007: 157-175).
 22. Se consideran personas trabajadoras informales aquellas que laboran en calidad de: trabajador o trabajadora familiar sin remuneración; las personas trabajadoras domésticas; los obreros, las obreras, empleados y empleadas particulares; quienes trabajan por cuenta propia y los patronos, patronas y personas empleadoras de fami- y microempresas. Generalmente, estas personas no están vinculadas a la seguridad social y/o no reciben pagos por concepto de prestaciones sociales. Por su parte, las personas subempleadas se consideran así porque laboran algunas horas a la semana y les queda tiempo para trabajar; o porque sienten que su empleo no es el adecuado según sus capacidades o porque ganan menos dinero del que esperan recibir (Alcaldía de Medellín, 2008).
 23. La colonización antioqueña, explicada por Roberto Luis Jaramillo, no fue una "empresa fácil ni romántica, como nos la han descrito tantas veces los forjadores de la 'epopeya' antioqueña [...] Se ha montado una novela rosa acerca del tema, desde el mismo periodo de la Independencia: el éxito ganado por nuestros hábiles comerciantes se generalizó con la osadía y prosperidad de nuestras colonias hacia el sur. Aún hoy tiene vigencia tal novela [...] cuyo protagonista es un antioqueño típico, guapo, blanco y titán del trabajo" (Jaramillo, 1988). Sobre este imaginario se construyó y prolongó en el tiempo el mito del pueblo antioqueño como "raza pujante y emprendedora", constructora de nación en Colombia, representación que sirvió para sustentar durante el siglo XIX y XX el proyecto ético y político de la antioqueñidad, conocido también como "la cultura paisa".

TERCERA PARTE
 SOBRE LAS ARTICULACIONES
 Y REARTICULACIONES DE LAS FAMILIAS
 COLOMBIANAS EN EL CONTEXTO
 TRANSNACIONAL